Revista Pardalis
https://pardalis.uan.edu.mx/

Universidad Autónoma de Nayarit
Licenciatura en Biomedicina Ambiental Traslacional

La ciencia en la vida cotidiana

Sludge: Una exploración sobre los costos invisibles de la burocracia

Rodríguez-Flores D. G.

Los trámites no solo cuestan dinero, también consumen tiempo, atención y esfuerzo. A partir del concepto de *sludge* de Cass Sunstein y la teoría de las cargas administrativas, este artículo muestra cómo ciertos diseños burocráticos pueden dificultar el acceso a empleos, servicios y programas públicos, especialmente para quienes tienen menos recursos.

Palabras clave:
Sludge, cargas administrativas, políticas públicas, burocracia, diseño institucional, desigualdad, administración pública



Licencia de contenido de Pexels

Dirección Especializada en Educación Virtual. Universidad Autónoma de Nayarit. Boulevard Tepic-Xalisco #325, C.P. 63155, dentro de la Ciudad de la Cultura "Amado Nervo". Tepic, Nayarit, México

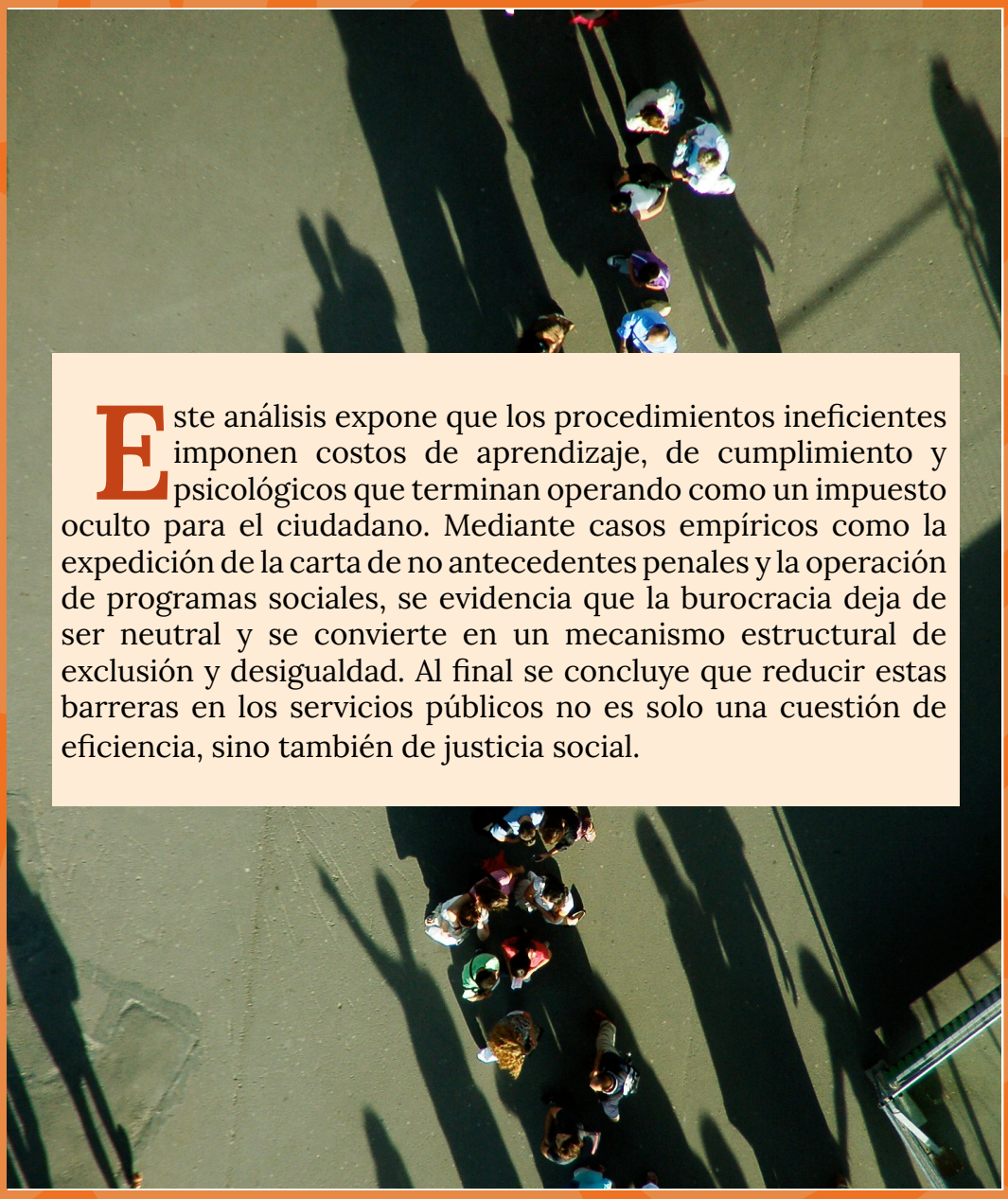
***Autor de correspondencia:**

Daniel Germán Rodríguez Flores.
Docente adscrito a la Dirección Especializada en Educación Virtual. Universidad Autónoma de Nayarit. Boulevard Tepic-Xalisco #325, C.P. 63155, dentro de la Ciudad de la Cultura "Amado Nervo". Tepic, Nayarit, México Teléfono (311) 142 0201. E-mail: daniel.rguez30@uan.edu.mx

Recibido: 8 de junio de 2026
Aceptado: 11 de agosto de 2026
Publicación: 24 de Noviembre de 2026

Cómo citar este artículo:
Rodriguez-Flores D. G., (2026) Sludge: Una exploración sobre los costos invisibles de la burocracia, Revista Pardalis, 3 , e0093.

Pardalis
Revista de divulgación científica



Este análisis expone que los procedimientos ineficientes imponen costos de aprendizaje, de cumplimiento y psicológicos que terminan operando como un impuesto oculto para el ciudadano. Mediante casos empíricos como la expedición de la carta de no antecedentes penales y la operación de programas sociales, se evidencia que la burocracia deja de ser neutral y se convierte en un mecanismo estructural de exclusión y desigualdad. Al final se concluye que reducir estas barreras en los servicios públicos no es solo una cuestión de eficiencia, sino también de justicia social.

Licencia de contenido de Pexels

Hace unos meses atrás, un alumno me comentó cómo fue su experiencia para ingresar por primera vez a un empleo, se sentía afortunado porque tener un empleo formal después de graduarse resulta complicado. Sin embargo, la expectativa cambió cuando le solicitaron la carta de no antecedentes penales. Sabía que no tenía registros, pero desconocía lo que implicaba obtener el documento.

Al día siguiente, Luis llegó a la Fiscalía a las siete de la mañana con una carpeta bajo el brazo. Pensaba que el trámite sería rápido, pero la fila que rodeaba el edificio y la negativa de atender su solicitud por una fotografía tamaño infantil que no cumplía requisitos que nadie le había explicado lo descolocaron. Apenas había reunido el dinero que su familia le prestó para cubrir el costo y sentir que madrugó para regresar otro día lo obligó a preguntarse si ese empleo valía el esfuerzo. Seguir invirtiendo tiempo y recursos en un proceso que se volvía cada vez más pesado resultaba poco atractivo frente a su necesidad urgente de obtener ingresos.

Y es que la realidad es que el caso de Luis no era una simple molestia, haber asistido tres días seguidos a recibir una carta firmada representó para él un transporte pagado de su bolsillo, tiempo perdido sin percibir un salario e incluso la incertidumbre de no saber si podría entregar el documento a tiempo en su nuevo trabajo.

Casos como el de Luis son constantes, en muchos trámites públicos el verdadero problema a veces es el recorrido que una persona debe de completar para cumplir con los requisitos. Cada fila, cada copia, cada traslado y cada instrucción confusa consume horas que nadie reembolsa. Aunque estos procedimientos buscan ordenar información y verificar datos, su diseño puede generar obstáculos que afectan de manera distinta a quienes tienen menos margen para reorganizar su día.



Licencia de contenido de Pexels

Cuando el diseño de un trámite exige recursos que no todos poseen en la misma medida, el procedimiento deja de ser neutral. Desde las políticas públicas, esta situación abre una pregunta cada vez más relevante: ¿cuánto cuesta realmente un trámite cuando, además del dinero, exige tiempo, atención y esfuerzo?

Es necesario entender que los trámites cumplen funciones necesarias dentro de la administración pública, pues permiten identificar personas, ordenar información, verificar requisitos, prevenir fraudes y garantizar que ciertas decisiones se tomen conforme a las leyes o normas conocidas. En ese sentido, la existencia de un procedimiento no significa por sí mismo un problema. Pero se convierte en uno cuando el diseño del trámite acumula pasos, requisitos o tiempos de espera que aportan poco al resultado final y trasladan al ciudadano un impuesto oculto derivado de la ineficiencia burocrática.

Cass Sunstein utiliza el concepto de *sludge* para para describir las fricciones que entorpecen acciones cotidianas como obtener un documento, acceder a un servicio o ejercer un derecho. Estas fricciones pueden presentarse como formularios extensos e instrucciones confusas, pero también aparece en visitas presenciales que podrían evitarse, requisitos duplicados, esperas prolongadas o procesos que exigen más esfuerzo del que aporta al resultado. Desde esta perspectiva, el sludge permite observar el trámite como una experiencia completa, pues aunque importa el documento, también importa el recorrido (Sunstein, 2019).

En este sentido, la carta de no antecedentes penales en Nayarit ilustra con claridad cómo opera el sludge, pues su problema no radica en debatir si el documento debiera solicitarse para contratar a alguien, sino en el diseño ineficiente del procedimiento para obtenerlo. Desde la perspectiva de Sunstein (2019), las fricciones se vuelven difíciles de justificar cuando la autoridad pide documentos que ya posee, omite reutilizar información o divide etapas que podrían integrarse en una sola. Son estas características del diseño y no el debate sobre el fin del trámite las que constituyen el *sludge*. En la carta de no antecedentes penales ocurre exactamente eso. Para verificar datos institucionales, el ciudadano debe desplazarse, entregar copias físicas y presentar fotografías. El trámite termina privilegiando la carga operativa sobre la eficiencia y convierte una verificación simple en un recorrido innecesariamente costoso.

Valero y Laurent (2025) aportan a la discusión al observar que el problema de un trámite puede estar en distintas partes de su diseño. En algunos casos, la dificultad nace de la información; en otros, del proceso, del esfuerzo requerido o de las condiciones de acceso. Para ello, propusieron una tipología para observar cómo se forman los obstáculos administrativos (Figura 1).



Figura 1. Tipos de *Sludge* en la administración pública.

Elaboración propia en Canva.

Reducir el *sludge* implica observar todo el recorrido del ciudadano, desde la búsqueda de información hasta la obtención del documento. Cada fricción en ese trayecto se suma a otras y termina formando patrones que no solo afectan a personas aisladas, sino que también modifican el funcionamiento de sectores completos.

De acuerdo con el Índice de Burocracia en América Latina 2023, presentado por Adam Smith Center for Economic Freedom, los pequeños negocios en México destinan en promedio 506 horas al año al cumplimiento de trámites burocráticos y obligaciones regulatorias (Adam Smith Center for Economic Freedom, 2024). Cuando los procedimientos públicos acumulan fricciones, el costo se extiende más allá del pago de derechos o la entrega de documentos. Cada demora reduce horas disponibles para producir, atender clientes o sostener actividades esenciales. Un trámite complejo puede aplazar una contratación, desalentar una solicitud o empujar a quienes buscan empleo hacia opciones informales.

Una de las consecuencias más importantes de estas fricciones aparece cuando el trámite comienza a modificar decisiones concretas. Una persona puede retrasar una gestión, abandonar un proceso de contratación, dejar pasar una beca o evitar un servicio público porque el procedimiento exige más recursos de los que puede sostener. En la carta de no antecedentes penales, el costo de completar el trámite puede ser tan alto que muchas personas optan por empleos informales que no lo requieren.

De tal manera que, un requisito pensado para acreditar la situación legal de una persona termina desincentivando la formalidad. Sin embargo, es un hecho que no siempre desincentiva a todos por igual un trámite con *sludge*, en realidad, la capacidad de sostener un procedimiento varía entre individuos y esa variación termina por definir quién avanza y quién no frente al mismo trámite.

Esa diferencia se explica con el concepto de cargas administrativas desarrollado por Pamela Herd y Donald P. Moynihan (2023). Si el *sludge* representa las fallas en el diseño de las políticas públicas, la carga administrativa constituye el impacto sobre la ciudadanía de esas fallas. En otras palabras, las cargas administrativas son los costos adicionales que una persona debe asumir más allá del objetivo directo del trámite para acceder a un servicio, cumplir una obligación o ejercer un derecho. Los autores distinguen tres dimensiones: de aprendizaje, de cumplimiento y psicológicos (Figura 2).

Los costos de aprendizaje surgen principalmente por el *sludge* de información y de elección, cuando el ciudadano debe averiguar qué requisitos necesita, dónde hacer el trámite, cuánto pagar o cómo corregir un error. Por otro lado, los costos de cumplimiento surgen principalmente del sludge de acceso, proceso y esfuerzo, cuando debe reunir documentos, trasladarse, hacer fila, llenar formatos, pagar cuotas o regresar otro día; y por último, los costos psicológicos, se manifiestan como consecuencia de la combinación de todas las fricciones anteriores, cuando el proceso genera estrés, frustración, incertidumbre o sensación de incapacidad frente a la autoridad. (Herd et al., 2023)



Figura 2. Tipos de cargas administrativas.

Elaboración propia en Canva.

No obstante, lo más importante de las cargas administrativas es que no pesan igual para todos. Una persona con tiempo, transporte, internet, redes de apoyo y horario flexible puede resolver un trámite complejo con menor dificultad. En cambio, quien vive lejos, trabaja por día, busca empleo o carece de información suficiente enfrenta un costo mayor que puede representar un obstáculo para salir de su situación actual. Por eso, las cargas administrativas pueden convertirse en un mecanismo de desigualdad, pues aunque el servicio exista, su acceso real depende de la capacidad que cada persona tenga para superar los obstáculos del procedimiento. Logrando que, el diseño administrativo termine influyendo en quién logra acceder, quién se retrasa y quién abandona el trámite.



Licencia de contenido de Pexels

Esto también aparece en las políticas sociales, en programas como las Becas Benito Juárez, la fricción puede surgir cuando los estudiantes deben entender canales de comunicación poco claros, resolver incidencias, trasladarse a puntos de atención o esperar en sucursales saturadas para acceder al apoyo (CONEVAL, 2022). En zonas vulnerables, estas exigencias no son menores pues pueden debilitar la capacidad real del programa para combatir la deserción escolar, sobre todo cuando el acceso al beneficio demanda tiempo, información y desplazamientos que los propios beneficiarios no siempre pueden sostener. Así, el problema no está en la intención de la política, sino en un diseño operativo que puede dificultar el acceso al beneficio que promete.

Por eso, analizar el *sludge* no es solo una cuestión de eficiencia administrativa, también es una cuestión de justicia social. El Estado no cumple solo con diseñar un trámite, crear un programa o reconocer un derecho si el camino para acceder a ellos exige tiempo, información o dinero que no todas las personas tienen en la misma medida. Ahora más que nunca, la implementación de políticas públicas debe evaluarse también por lo que vive el ciudadano, desde cuántas veces debe acudir, qué información recibe, cuánto espera, qué costos asume y qué ocurre si no logra completar el procedimiento. Reducir estas cargas implica entonces, simplificar requisitos, reutilizar información que la autoridad ya posee,

mejorar los canales de atención y diseñar procesos que respeten el tiempo de todas las personas, especialmente de quienes tienen menos margen para perderlo.

Conclusión

El tiempo no aparece en los recibos, pero se paga. Se paga cuando una persona pierde una mañana en una fila, cuando debe regresar otro día por un documento, cuando deja de trabajar para cumplir un requisito o cuando abandona un trámite porque no puede sostener el desgaste que exige. Por eso, hablar de *sludge* es entender que más que una molestia cotidiana, es un impuesto oculto que muchas veces hemos aprendido a normalizar.

Sin duda, los trámites, servicios y programas públicos necesitan reglas. La administración pública debe verificar información, prevenir abusos y ordenar procesos. Sin embargo, esas funciones no justifican cualquier diseño. Cuando un procedimiento consume más tiempo, energía o dinero del necesario, deja de servir plenamente a su propósito y comienza a cerrar oportunidades. El Estado no debería convertir sus propios mecanismos de acceso en filtros que favorecen a quienes tienen margen para esperar, desplazarse o equivocarse.

Con frecuencia, los gobiernos olvidan que detrás de cada trámite hay una persona organizando su día, su salario, sus cuidados, sus estudios o su búsqueda de empleo. Proteger el tiempo de la ciudadanía también es una forma de proteger sus derechos. Reducir cargas innecesarias no significa eliminar toda regla, sino construir procesos más claros, justos y humanos para que los servicios públicos cumplan realmente con aquello que prometen.

Declaraciones éticas

El autor declara haber utilizado la Inteligencia Artificial generativa de Copilot para la optimización sintáctica, y pulido gramatical del texto.

Conflicto de interés

El autor declara no tener conflicto de interés.

Lecturas recomendadas

» Ferraioli, F. (2026). Carga administrativa y administración digital: un enfoque teórico y empírico sobre la experiencia ciudadana frente a la Administración. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (194), 45–62. https://doi.org/10.5477/cis/reis.194.45-62

» Big Think. (2021, 13 de septiembre). “Sludge”: Cómo la burocracia abusa de tu tiempo | Cass Sunstein para Big Think [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eBUsmxM5r0I

Quien escribe



Daniel Germán Rodríguez Flores.

Politólogo, administrador público y maestro en Desarrollo Humano por FLACSO Argentina. Su trayectoria profesional se centra en la administración pública, la asesoría legislativa y la función electoral. Actualmente ejerce como profesor y presidente del Comité Curricular de la Licenciatura en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nayarit.

Referencias

» Adam Smith Center for Economic Freedom. (2024). Índice de Burocracia en Iberoamérica 2023. Florida International University.

» CONEVAL. (2022). Evaluación de procesos del Programa Beca Universal para Estudiantes de Media Superior Benito Juárez. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

» Herd, P., Hoynes, H., Michener, J., & Moynihan, D. (2023). Introduction: Administrative Burden as a Mechanism of Inequality in Policy Implementation. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 9(4), 1–30. https://doi.org/10.7758/RSF.2023.9.4.01

» Sunstein, C. R. (2019). Sludge and ordeals. Duke Law Journal, 68(8), 1843–1883. https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol68/iss8/6

» Valero, D., & Laurent, D. (2025). Sludge: el laberinto burocrático en la interacción ciudadanía-Estado. Aplicaciones, desafíos y oportunidades para la mejora de la experiencia ciudadana. ICE, Revista de Economía, (940), 53–71. https://doi.org/10.32796/ice.2025.940.7943